

LOS INDICADORES DE LA POBREZA EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Aurelio Cebrián Abellán

Universidad de Murcia

RESUMEN

Es un Estado de fuertes contrastes en todos los órdenes, pero especialmente en lo social y económico, con agudos desequilibrios territoriales en los aspectos citados. Pero junto a factores estructurales han incidido razones económicas hasta alumbrar conjuntamente un incremento de niveles de pobreza, situación analizada atendiendo a varios parámetros: sanidad (infraestructura y desnutrición infantil), educación (infraestructura y niveles educativos) e infraestructuras y dotaciones básicas (vivienda, abastecimiento de agua, electricidad, drenajes, y transportes y comunicaciones). Por último, el reflejo cartográfico de esos parámetros sobre el territorio hasta llegar al mapa de zonas prioritarias por nivel de pobreza.

Palabras clave: pobreza, sanidad, educación, infraestructuras, dotaciones básicas, indigenismo, territorio.

ABSTRACT

Guatemala is a country which maintains strong contrasts, mainly in the social and the economic field. Moreover, it suffers from deep territorial unbalances in those fields. Notwithstanding, and together with structural factors, economic reason have fallen upon an increasing poverty level, which can be considered in different, parameters: public health (infraestructure and children's undernourishment), education (infraestructure and educative levels), and basic infraestructures and services (acommodation, water and electricity supply, drainages, transport and communications). Finally, it is quite useful to check how these parameters are reflected in a map, where priority areas with high poverty level can be delimited.

Key words: poverty, public health, education, infraestructures, indigenism, insufficient services, territory.

Fecha de Recepción: 15 de noviembre de 1999.

* Dpto. de Geografía Física, Humana y Análisis Regional. Universidad de Murcia. Facultad de Letras. Campus de la Merced. 30001 MURCIA (España). E-mail: aurelio@fcu.um.es

Un rasgo distintivo nacional se corresponde con el desigual grado de desarrollo y distribución de la población, con un Norte, Noroeste y Suroeste que concentran la mitad de la población total y rural indígena, y que se definen por la peor situación nacional para ambas. Luego, la disfuncionalidad en el reparto con más de 19.000 pequeñas comunidades de menos de 2.000 hbs, dispersas y padeciendo extrema pobreza. Desde mediados de siglo se ha multiplicado la densidad por cuatro, si bien en el área central lo ha hecho por veinte y en el Noreste por dieciocho; y ello como resultado de un auge demográfico que en la segunda mitad del siglo se ha multiplicado por tres. Además, las desigualdades regionales son abismales; así, la región metropolitana genera por sí sola en 64% del PIB. El nivel de subempleo alcanza al 60% de la población. Y sólo está en explotación el 17% de la superficie nacional (CEBRIÁN ABELLÁN, A., 1996; 1-3).

En un país mayoritariamente rural (80% población) la característica es una tremenda disfunción en el reparto de la tierra (un dos por ciento de los propietarios acapara el 65% de la tierra útil), con la derivación consecuente de tres cuartas partes de las familias catalogadas como pobres. Un contraste que se agudiza con los fuertes interregionales y de reparto de la población, con un 62% rural que suele vivir en condiciones incluso de extrema pobreza (UNICEF-SEGEPLAN, 1994; 26), tanto por razones estructurales como por el fuerte crecimiento (en lo que va de década la población rural ha crecido una tercera parte en Chiquimula, casi una cuarta parte en Petén, y por encima de la décima en quince departamentos más).

Derivación de esos antecedentes y de coyunturas económicas es el incremento de los niveles de pobreza detectados en los últimos años. Han incidido además, y de modo decisivo, razones estructurales, que en una primera aproximación pueden ser las siguientes:

- alza de precios de productos básicos, que en solo un año (1990) llegaron a alcanzar el 67%;
- injusta distribución del ingreso nacional y aberrante acaparamiento, porque la décima parte de la población mejor situada ha llegado no sólo a incrementar su participación sino a alcanzar el 45% del mismo;
- en el primer quinquenio de los noventa el desempleo total no ha dejado de crecer hasta acercarse al 40% de la población económicamente activa (PEA);
- más de la tercera parte de la PEA no se encuentra cualificada, al margen de ser analfabeta;
- en la última década los salarios reales se redujeron en un tercio, hasta hacer crecer los niveles de pobreza a un ritmo del 3% anual.

Como resultados inmediatos de esta secuencia dos:

- De un lado, la cuarta parte de los profesionales y patronos incluso se acercan hoy a los niveles de pobreza (más en áreas rurales que urbanas).
- De otro, la sociedad guatemalteca se encuentra estigmatizada por profundas desigualdades sociales, altos índices de subempleo, crecimiento de los grupos sociales marginados, con un auge económico reciente concentrador y excluyente (DEL VALLE, 1988; 6).

Lo cierto es que a finales de los ochenta tres cuartas partes de los hogares estaban en situación de pobreza (una décima parte más que a los inicios), mientras en el campo los pobres aumentaban al 84% y los indigentes a un 66%, con la mayor parte concentrados al noroeste del país donde dicha cifra ascendía al 90% en las áreas rurales (AVANCSO, 1993; 8). Pero, además, la tercera parte de los habitantes del área metropolitana (más de ochocientos mil personas) se emplazan ya en asentamientos marginales, definidos por la pobreza extrema, con tres cuartas partes de desempleados y valor similar de residentes en covachas y en condiciones infrahumanas (CEBRIÁN, A., 1996; 2).

Los indicadores de las necesidades insatisfechas señalaban entonces la escasa cobertura de la educación primaria (44% de media), y el insignificante nivel alcanzado por la secundaria (1,5%, además muy desigualmente distribuida al ser mayor en las urbes que en el campo, superior entre ladinos que mayas, y entre varones que hembras). Pero también el bajo promedio de personas por cama hospitalaria (1 por cada 779 personas) (IDIES, 1994; 20). Y por último los bajos salarios, más inflación y desempleo al alza. Desde entonces se han mantenido cuando no agudizado los altos niveles de subempleo, estacionalidad rural y carencia de trabajo en las áreas urbanas, productividad decreciente de la tierra, bajo nivel de ingresos, carencia institucional en muchas áreas e hiperconcentración en otras, etc.

Así pues, incremento de una pobreza que puede ser medida bajo múltiples parámetros, al conformar un concepto definido como el conjunto de necesidades básicas no satisfechas. De entre todos, para tres cuartas partes de la población guatemalteca se identifica con la necesidad no surtida de comer, con sus consecuencias derivadas, y entre ellas la consolidación de una cultura del hambre. Pero también es la carencia de vivienda propia (más de la mitad de los habitantes del área metropolitana ocupa lotes ilegales de tierra). Sin embargo, dicha pobreza es difícil de cuantificar al funcionar mecanismos de solidaridad que camuflan un mayor número de indigentes que los realmente considerados.

Entre las causas (al margen de las aludidas) los mismos pobres resaltan los bajos salarios, incremento continuado de precios en los productos de primera necesidad, y carencia de tierra y falta de trabajo, por ese mismo orden. Las consecuencias las identifican con escasez de comida, mal estado de las viviendas y parquedad de puestos de trabajo.

Entre razones estadísticamente probadas y reales aportadas por los propios necesitados la realidad indica:

- Que los pobres rurales se dedican prioritariamente al jornaleo local o migratorio (con remuneraciones de 6 francos/día), y participación femenina muy significativa; entre tanto, en áreas urbanas al comercio, servicio doméstico o actividades precarias. En cualquier caso la colaboración infantil se considera esencial. En el campo el problema reside en el elevado precio de las tierras alquiladas unido a su baja rentabilidad, al margen de la dependencia de los intermediarios, y estacionalidad laboral, rasgo especialmente agudo en el interior del país. En las urbes la población pobre desempeña más de un oficio al mismo tiempo, lo que se traduce en subocupación; pero adicionalmente se acompañan problemas como desempleo abierto, y especialmente una violencia irradiada que impide el normal desarrollo de las actividades.

- Al margen de los factores que se analizarán en detalle, los mecanismos de supervivencia se encuentran estandarizados, de tal modo que la situación de pobreza se verá agravada por causas relacionadas jerárquicamente: muerte del cabeza de familia, alcoholismo, drogas y delincuencia, pérdida de empleo, desplazamientos por violencia (largamente mantenidos por el dilatado conflicto bélico que ha asolado al país), abandono del hogar por cualquiera de los cónyuges, violaciones a mujeres, y pérdida de los medios de sustento. Entre ellas la segunda afecta a todas las regiones, como un abandono también extensible ahora a todos los sectores de población; mientras, la violación se acusa menos en las áreas rurales aunque no por menor incidencia sino por miedo a la denuncia (se prefiere ocultar el hecho que mancillar la reputación femenina al declararlo).

Del conjunto de parámetros posibles se procederá a la selección de algunos esenciales y representativos al objeto de sintetizar la realidad social del país paraíso de las multinacionales. Por razones de espacio se ha optado por abordar tres esenciales, que proporcionan una imagen más que suficiente y válida: salud, educación, y dotaciones infraestructurales, para en última instancia centrar los mapas de la pobreza. Se trata de un conjunto de factores que también ofrecen la posibilidad de datos actualizados.

1. LA CUESTIÓN SANITARIA

El gran problema nacional es doble: el acceso a los servicios y la deficiencia con que son prestados. En el primer caso se incluye la dificultad para conseguirlos en cabeceras municipales, en contraste con la concentración en la región metropolitana (más de tres cuartas partes de los médicos). Ello explica el arraigo de clínicas parroquiales o particulares. Además, la deficiencia contrasta con la difusión de enfermedades y cantidad de población afectada. Así, las más importantes entre la población pobre se identifican, por orden de importancia, con vías respiratorias (gripe, bronquitis, neumonía,...), desnutrición, problemas gastrointestinales, paludismo y cólera. Los muy comunes problemas gastrointestinales en las áreas urbanas derivan de la escasez de agua potable y saneamiento ambiental en más de la mitad de los asentamientos precarios, que incluso presentan condiciones propicias para brotes de cólera.

Si algo faltaba al panorama descrito, los problemas de alcoholismo y consumo de drogas son especialmente incisivos en las áreas urbanas. El primero es en parte sanitario, pero sobre todo económico, familiar y hasta comunitario. En muchos lugares el alcohol se considera una alternativa al desempleo o carencia de ingresos; en otros como una costumbre, porque su uso ha formado y forma parte de las celebraciones religiosas de las comunidades indígenas en las que participan también mujeres y niños; se ha tratado de un alcoholismo ritual, que se insertó en la vida social y familiar, para arraigarse como sustitutivo del hambre. Sus efectos son cuando menos dobles:

- familiar se utiliza para adquirir «chicha» (bebida fermentada del jugo de caña de azúcar), lo que descarga buena parte de responsabilidad laboral en las mujeres ante la negligencia de los hombres, a veces hasta por incapacidad física;
- familiares, con la desintegración nuclear, maltratos y pérdida de capital familiar.

Y frente a los problemas están los métodos. El sanitario suele resolverse con la medicina tradicional, con remedios caseros proporcionados por curanderos y rezadores, o bien con la combinación de esta variante con sistemas económicos, porque una parte importante del ingreso convencionales. La razón es que, por cultura, la medicina tradicional se convierte en la alternativa sanitaria de la población pobre debido a la dificultad para irradiar mecanismos occidentalizados; y cuando se consigue la atención primaria no provee medicinas, circunstancia que se solventa recurriendo a métodos y productos tradicionales tanto en áreas rurales como en la misma región metropolitana. Por tanto, la cuestión reside en la falta de dinero, que fuerza a recurrir a cualquiera de las alternativas, sin gran diferencia entre las áreas interiores y urbanas, o entre regiones indígenas y ladinas.

Para constatar la situación real de forma individualizada se analizarán los dos siguientes parámetros:

1.1. Infraestructura sanitaria

Como se apuntó, los servicios de salud se concentran en la región metropolitana, lo que propicia fuertes déficit asistenciales en determinadas regiones, como ocurre en el norte, noroeste y suroeste. Las necesidades son cubiertas por una red genérica de 3.905 establecimientos, de los cuales sólo 1.227 son públicos, mientras del resto (67,5%) corresponden a ONGs; pero sólo se dispone de 7.239 médicos, en un 80% concentrados en la región metropolitana, circunstancia que distorsiona gravemente la relación media que sólo asciende a 7 médicos por mil habitantes (en determinadas regiones es de 1,1), frente a los 28 de la citada área metropolitana (UNICEF-SEGEPLAN, 1994: 65). Como agravante, en dicha región se emplaza más de la mitad de las enfermeras graduadas, y un valor similar de auxiliares de enfermería.

Pero los datos ajustados indican que el país cuenta con una infraestructura operativa de salud cifrada en 551 centros (sólo 36 son hospitales) que aportan 7.259 camas, o lo que es decir una cama por cada 1.378 personas (cifra alejada del 1/1.000 ofrecida oficialmente); pero con graves distorsiones, como en el Departamento de Guatemala donde existe una relación de 1/330.

Junto a esas deficiencias y disparidades el sector sanitario se encuentra además en franco deterioro, y cada vez más alejado de las crecientes necesidades nacionales (la inversión por habitante ha caído un tercio desde 1970, y en 1992 se cifraba sólo en 4 francos/hb/año).

1.2. Desnutrición infantil

Para analizar este parámetro se debe partir de la situación de las madres, con una tasa de mortalidad que se encuentra entre las más altas de Iberoamérica, muy en relación con la natalidad puesto que la mitad de los fallecimientos se deben a hemorragias postparto. Es la mejor prueba de la penosa situación de partida, luego confirmada con alta fecundidad (5,4), también de las más elevadas de la región porque el uso de anticonceptivos es de los más bajos. Además, el 62% de las madres no reciben atención prenatal, desarrollando su gestación bajo una dieta popular pobre en proteínas, carne y fruta, y deficiente en vitamina A.

En general, oficialmente se reconoce el deterioro de la infraestructura de salud por falta de fondos e inversiones, y en especial de profesionales y equipos esenciales. Con estos puntos de partida el panorama no puede ser alentador para la infancia a pesar de logros alcanzados recientemente, como unas tasas de mortalidad infantil que han caído sustancialmente.

Otro hecho constatado es el descenso de la morbimortalidad a casi la mitad en los últimos tres lustros, esencialmente por el control de enfermedades diarreicas y respiratorias, rasgo nivelado por los problemas nutricionales que han tenido más incidencia. Estos últimos además han sido mayores en regiones indígenas. Así, la citada morbimortalidad sigue siendo más alta en el área rural (un 20 por mil superior), entre la población indígena (un 17 por mil), y en la que padece extrema pobreza (casi duplica a la no pobre).

En buena parte de los casos deriva de la escasez de alimentos básicos (por bajo nivel salarial y precio alto de los productos); por ello la tercera parte de la población pobre padece desnutrición proteico-calórica y deficiencias en nutrientes específicos (vitamina A, yodo y hierro). No es de extrañar que el problema ocupe nivel de prioridad en todas las regiones, si bien en el área urbana se relaciona con la disponibilidad de ingresos en relación con el alza de los productos básicos, mientras en la rural con el cultivo de productos de bajo valor comercial y la escasa productividad de las tierras (lo que incluso agudiza el desnivel entre ingresos y gastos detectada en el área urbana).

De ese modo, la desnutrición infantil revela una estrecha correlación con la pobreza, salud, ruralidad, indigenismo y analfabetismo. Pero los datos son suficientemente explícitos; así, los niños menores de tres años presentan las tasas más elevadas de desnutrición protéico-calórica, con una media de la tercera parte con peso inferior al normal (la cuarta en áreas urbanas y la tercera en rurales), y déficits de talla incluso asombrosos: un 47% inferior en las áreas urbanas, 62% en las rurales, y 72% en la población indígena. Es decir, que la peor situación corresponde a las comunidades rurales indígenas, y en especial en el noroeste donde casi la mitad de los menores están afectados de desnutrición.

Incluso más, porque superados los tres años, y hasta los cinco, la desnutrición moderada casi ha logrado doblarse en los últimos años, mientras la severa ha conseguido prácticamente lo mismo aunque sobre porcentajes bajos (pero se ha triplicado en regiones indígenas). La desnutrición crónica aún afecta al 58% de los niños menores de tres años, y es muy superior entre hijos de indígenas y madres analfabetas, con déficits de talla muy dispares.

Desde los seis hasta los nueve años se observan unos niveles de desnutrición del 37%, con cifras que casi se doblan en determinados lugares indígenas como Sololá. Aquí los déficits de talla generales son similares a los correspondientes de desnutrición, valores que se doblan en los sectores indígenas de Sololá y Totonicapán. Reveladora es la situación geográfica porque once departamentos superan la media nacional de desnutrición severa (8,4%), de los cuales ocho se encuentran en el Altiplano, región indígena definida por altas cotas de analfabetismo y pobreza estandarizada.

Como síntesis, el país ocupa el segundo lugar centroamericano por desnutrición en menores de cinco años (tras Haití), con la tercera parte con acusado déficit de peso. A razones estructurales se une que la dieta se haya reducido en variedad, cantidad y calidad, por-

que en la última década el precio de los alimentos básicos subió un 157% mientras los salarios sólo en un 68%. Y a esta situación es difícil poner remedio porque aún la mitad de las familias urbanas consume menos calorías de las necesarias, y la tercera parte en las áreas rurales. Y, como media, el 65% de las familias del país consume la tercera parte del pan y carne necesarias, la cuarta de derivados lácteos, y el 40% menos de las grasas y huevos requeridos. Así, no será extraño que se cumpla la previsión a corto plazo de que tres cuartas partes de los menores de cinco años corran alto riesgo de desnutrición.

2. SITUACIÓN EDUCATIVA

El país ocupa el segundo lugar iberoamericano por mayores índices de analfabetismo, con tres cuartas partes de la población rural y la tercera urbana, rasgos agudizados entre la población indígena y femenina. Las causas son estructurales, pero también incide notablemente la escasa asignación del PIB a educación (1,2%), y casi la totalidad va destinada a satisfacer salarios docentes, con el consecuente estancamiento de las inversiones frente a las necesidades crecientes derivadas del fuerte crecimiento demográfico y juventud de la población. Así se explican las realidades presentes: que el nivel preprimario cubra un exiguo 17% de necesidades; entre los 5 y 6 años menos de la tercera parte; el primario (7 a 12 años) el 68% (unos 450.000 no asistieron a la escuela); y la educación básica un escaso 18%.

En razón de las urgencias la esencial es la educación primaria, que presenta disparidades muy notables de cobertura en el país; así, en la región metropolitana es del 91%, mientras en otros sectores no alcanza la mitad. En el campo la dotación de maestros es la mitad que en las áreas urbanas, cuando en aquél se encuentra el 80% de escuelas de este nivel. A la infradotación se adiciona la cuestión indígena ya que la cuarta parte de los alumnos inscritos en primaria pertenecen a etnias, que registran los mayores índices de repetición (tres cuartas partes). Pero del resto el nivel de suspensos alcanza el cincuenta por ciento. Además, sólo un 43% de todas las mujeres han asistido a la escuela primaria, con las secuelas derivadas sobre la vida social y hábitos que encuentran su reflejo en otras facetas esenciales (alimentación, higiene,...).

El panorama nacional no es alentador desde una perspectiva educacional ya que la mitad de los mayores de 15 años son analfabetos, valor que sube a tres cuartas partes en las regiones indígenas y rurales. Y encima a la población en estado de pobreza la definen tres rasgos negativos:

- Un nivel de analfabetismo que alcanza el 50%, con la diferencia de mayores valores en el interior y muy inferiores en la región metropolitana, si bien la porción femenina presenta altos índices en cualquiera de las situaciones.
- Otro de escolaridad que afecta a la octava parte de la población pobre rural, que baja sólo a la sexta parte en el área metropolitana.
- En ambas situaciones el nivel de acceso a escolaridad media es casi nulo.

Junto a las reiteradas razones estructurales también persisten factores negativos para explicar situaciones concernientes a la población pobre, como su valoración pésima del

sistema educativo, su urgencia de otras prioridades, y las barreras lingüísticas. Así, el trabajo es considerado más urgente que la educación (un menor de siete años recibe un salario de unos 4 francos/día en las plantaciones). Luego se van añadiendo otras circunstancias, como el incumplimiento laboral de los maestros, que además no suelen hablar el idioma indígena correspondiente a la comunidad receptora.

El problema pendiente es la inexistencia o insuficiencia de infraestructura educacional. Se demanda la construcción de escuelas en el interior del país porque buena parte de aldeas y caseríos carecen de primaria completa. Sin embargo, se ha de partir de otra premisa oficialmente reconocida, la ineficacia del modelo educativo, reflejada en actitudes de recelo a la alfabetización, como ocurre con las comunidades mayas de los quichés y cakchiquiles. Ello explica sus altas tasas medias de analfabetismo (41%), aunque con valores muy inferiores (14%) en la región que engloba al área metropolitana, mientras en los departamentos de las Verapaces se registran los más altos índices (65%) debido a la alta proporción indigenista. Esta circunstancia vuelve a mostrar los fuertes desequilibrios nacionales constatados en otros parámetros.

En educación primaria un 17% de la escolarización está en manos no oficiales, aunque ello resulta indiferente para la escasa retención en áreas rurales, en una tasa neta de escolaridad muy alejada de la deseable (en algunos departamentos como las Verapaces es justo la mitad que la media nacional). Nuevamente se vuelve a constatar la estrecha relación entre pobreza, indigenismo y analfabetismo.

Y en esas deficiencias infraestructurales el 38% de las escuelas primarias rurales sólo ofrecen una educación primaria incompleta, al margen de que el respeto a las particularidades indígenas no se cumple ya que el bilingüismo sólo está establecido en el 5% de las escuelas existentes, una cifra absolutamente testimonial teniendo en cuenta la relevancia del componente indígena en el país (el más alto de toda Iberoamérica).

En lo que afecta al emplazamiento de centros de formación técnica oficial los desequilibrios territoriales son más agudos porque más del 90% de los alumnos pertenecen a áreas urbanas, como acontece con otro tercio de los institutos de extensión y mejoramiento de la educación media. Además, un escaso porcentaje de población estudiante continúa sus estudios hasta el ciclo diversificado.

Así pues, el sistema educativo se caracteriza por necesidades continuadas de inversiones debido tanto a carencias arrastradas como al desorbitado crecimiento demográfico. La más urgente es la escasez de maestros, e incluso solventar el problema de la escolarización parcial (un maestro atiende al mismo tiempo dos escuelas distantes, reduciendo los periodos lectivos a la mitad del tiempo requerido).

Las deficiencias más claras se cuantifican del siguiente modo:

- La relación entre maestros y grados es del 50%.
- Como resultado inmediato (junto a múltiples causas estructurales) el nivel primario presenta altos índices de deserción y repetición, de tal modo que en las áreas rurales sólo el 15% de los alumnos terminan el ciclo y en las urbanas el doble.
- Y que los gastos se concentran en aumentos salariales mientras que la cobertura requerida queda desatendida.

3. INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES BÁSICAS

Al margen de las mencionadas, la priorización de necesidades de infraestructura básica para la población pobre es la siguiente: vivienda, agua, electricidad, drenajes, transporte y comunicaciones.

3.1. Vivienda

El país ha experimentado un crecimiento urbano módico (entre 1981 y 1994 ha pasado del 32,7 al 35%). Pero las deficiencias infraestructurales han marcado la pauta; así, en los comienzos de la década de los noventa el déficit habitacional se cifraba en 863.000 viviendas, para subir a 1,12 millones en la actualidad; se ha dado, por tanto, un incremento del 139% desde 1980. Así, puede decirse que la construcción de viviendas se ha alejado considerablemente de las necesidades derivadas del crecimiento de la población (CEBRIÁN, A, 1996; 4). Es preciso señalar que el crecimiento lento del volumen y proporción de la población urbana a escala nacional obliga a considerar a Guatemala como un país rural en la segunda mitad de la década actual; el INE afirma que pese a ser esperanzador el hecho no puede hablarse de un proceso de urbanización sino de un crecimiento de la población urbana, del que deriva la disfunción viviendas/habitantes.

Como resultado sólo la tercera parte de los pobres habitan viviendas propias, mientras una décima parte respectiva lo hace en terrenos ilegales ocupados por colonias marginales, habitáculos alquilados, o viviendas prestadas por familiares. Pero el problema se complica al introducir el índice corrector de las condiciones de habitabilidad, definidas por carencia de servicios básicos, hacinamiento y ausencia de títulos de propiedad que impiden realizar inversiones de mejora.

3.2. Abastecimiento de Agua

La cuestión nacional es la dificultad de acceso al suministro (cuesta una media de 250 francos) y el posterior servicio deficiente. La situación se solventa en la mayoría de los casos hirviendo agua, actividad cada vez más estandarizada como derivación de los programas de educación en salud realizados para parar la epidemia de cólera de 1991.

Los datos indican que el 44% de los hogares del país carecen de suministro de agua potable, al margen de la periodicidad con que se procede al mismo (en trece departamentos se supera dicha media y en nueve el cincuenta por ciento). Pero en el Noroeste y Norte el nivel de hogares sin esta dotación supera el 60%, valor que sube al 84,5% en el Petén. Como cifra global medio millón de hogares carecen de suministro, mientras que sólo la cuarta parte de la población urbana del interior recibe aguas tratadas.

3.3. Electricidad

El problema de acceso al servicio es similar al del agua, lo que explica como la media nacional de hogares sin suministro eléctrico alcance el 51%, con la particularidad de que en trece departamentos se supera dicha proporción, de entre los cuales ocho se encuentran por

encima del 60%. En esta dotación básica queda un mundo por hacer a pesar de los esfuerzos que la colaboración internacional está desarrollando en áreas rurales aisladas del interior.

3.4. Drenajes

La dificultad de acceso es genérica para todo el país con la excepción del área metropolitana. Pero no se considera prioritario dicho servicio para la población, sobre todo en áreas rurales por los hábitos tradicionales de utilizar el monte para satisfacer necesidades. Además, la infraestructura existente es deficiente tanto por falta de medios como por el desorbitado crecimiento urbano espontáneo. Por otra parte, la instalación se convierte en compleja la instalación tanto por auge y dispersión de las viviendas como por corrupción de los responsables del control de vertidos ante la falta de medios de las municipalidades para atajar el problema.

La cuestión se cuantifica de la siguiente forma: de los 22 departamentos que integran la república trece se encuentran por encima de la media de hogares sin servicio sanitario (26,4), de los cuales siete están por encima del 40%.

3.5. Transportes y comunicaciones

Un problema esencial es la dificultad de acceso a las cabeceras municipales desde aldeas y caseríos debido a la red de caminos vecinales, intransitables durante la época de lluvias. También la carencia generalizada de medios de comunicación, hasta estandarizarse el peatonal, y hacerse necesaria la construcción de puentes peatonales que permitan acortar trayectos.

En comunicaciones el número de teléfonos por 1.000 habitantes es 18, pero con grandes disparidades; así en el departamento de Guatemala sube a 69 mientras en Totonicapán baja exclusivamente a 1. Considerando la importancia del medio por sus implicaciones sociales queda todo por conseguir en este sentido.

4. LOS MAPAS DE LA POBREZA

Siguiendo la secuencia de parámetros analizados el primer aspecto a señalar es la coincidencia de áreas deficitarias con las regiones que albergan la mitad de la población y la rural e indígena predominantes. El inicial afecta a las condiciones de salud. El apartado correspondiente señalaba la mejor situación infraestructural del área metropolitana frente a las deficiencias generales de muchos departamentos hasta alumbrar fuertes desequilibrios territoriales. Algunas variables como la tasa de mortalidad infantil constataban el crecimiento en Quetzaltenango (hasta de un 16 por mil) y Baja Verapaz, mientras buen número de departamentos quedaban por encima de la media nacional. Por su parte la morbilidad es mayor en áreas indígenas (Totonicapán, Retalhuleu, Escuintla y Chimaltenango). La desnutrición severa de niños entre tres y cinco años se ha triplicado en Baja Verapaz, Zacapa, Sololá, Totonicapán, Jalapa, Escuintla, y Santa Rosa. La aguda supera el 41% de los niños, y las tres cuartas partes en desnutrición global en casi todos los departamentos mencionados.

Con estas premisas el mapa correspondiente relaciona la dinámica de la población (es decir, las necesidades potenciales) con las condiciones reales de salud, manejando las variables de mortalidad, densidad de población e instalaciones de salud. El resultado es que ninguna zona del país se adscribe a la situación moderadamente crítica, mientras es crítica en el Petén y Noroeste (Huehuetenango), muy crítica en el Noreste (Alta Verapaz, Izabal y Zacapa) y resto de la fachada pacífica (San Marcos, Retalhuleu, Sololá y Sacatepéquez). El resto del país en su mitad se adscribe a una condición severamente crítica.

Con todo, el problema no es el actual sino el que se presenta a corto plazo debido al fuerte incremento que experimentará la población sólo en el próximo quinquenio, para el conjunto del país cifrada en un 18%, lo que en valores absolutos representará más de dos millones de personas, pero sobre un total de diez. Los cálculos hechos para el año dos mil muestran que existirán una megalópolis, una enorme ciudad-capital de tres millones y medio de habitantes, mientras que la segunda ciudad del país (Quetzaltenango) apenas alcanzarán el millón. Este fenómeno corrobora a largo plazo las consecuencias derivadas de la división político-administrativa de la nación, y del centralismo de la capital, hechos comporbados a lo largo del trabajo y reflejados en las disfunciones territoriales de todo tipo que originan aquellas. Así se estima que en departamentos con situación muy crítica se ganará un contingente de 604.000 personas, aún contando con la emigración de casi 400.000 desde Alta Verapaz en dirección a la región centro; pero ello no significará amortiguación del problema porque el auge representará más de la cuarta parte del nacional. Más compleja será en el resto de departamentos en fase severamente crítica al acumular las tres cuartas partes de las necesidades por crecimiento demográfico, que se cifrará en 1,6 millones de personas. Además, en algunos casos el auge llegará a ser espectacular; así, por encima de la cuarta parte en los departamentos de Baja Verapaz y Petén; por encima del 18% (la media nacional) se encontrarán Izabal, Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla, San Marcos, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu, Huehuetenango y Quiché. Y el resto bien por encima del 13%, con la excepción de Alta Verapaz, que perderá un 62%.

La situación de la actividad educativa indicó algunos datos que señalaban como anticipo posiciones geográficas claras. Así, la relación entre maestros y grados es baja (una cuarta parte), alcanzando la mitad de la media nacional, en Alta y Baja Verapaz, Huehuetenango y Quiché, mientras es muy aceptable en contraste con la situación nacional en la región metropolitana. En emplazamientos de formación técnica oficial la mitad de los alumnos se emplazan en esta última área, como también ocurre con los centros de orientación comercial. La muestra de estos indicadores prueba los desequilibrios territoriales en dotaciones y situaciones, aunque del capítulo correspondiente se deducía la peor situación de las regiones indígenas de las Verapaces.

Ahora, el mapa correspondiente, establecido con las variables de analfabetismo, escolaridad y acceso al sistema educativo, indica que la situación nacional va sólo de muy crítica (que afecta a dieciséis departamentos) a severamente crítica, con sólo seis departamentos emplazados en el Sur (San Marcos, Suchitepéquez, Chimaltenango, El Progreso, Santa Rosa y Jutiapa). La razón estriba en la carga indígena, aunque el problema es futuro ya que estos últimos departamentos verán incrementada su población hasta el año dos mil en 460.000 personas (21%). Pero debido a la situación de los restantes departa-

mentos, el conjunto del país y los nuevos dos millones de habitantes padecerán situaciones de muy críticas a peor.

En cuanto a los servicios básicos señalar que la más alta cota de infradotación en suministro de agua figuraba el Noroeste, Norte y región del Petén. En el correspondiente a electricidad más de la mitad de los departamentos presentaban infradotación, que superaba con creces la media nacional. Y en drenajes la mitad de los mismos padecían idéntica situación.

El mapa de turno hace uso de las variables citadas anteriormente, de tal modo que la resultante abarca todas las categorías, si bien con precisiones. Así, la situación moderadamente crítica sólo se da un departamento (Sacatepéquez) debido esencialmente a la presencia de la ciudad de Guatemala la Antigua. La crítica presenta igual panorama (El Progreso), mientras la muy crítica se emplaza en el Centro-Sur, pero abarcando ya diez departamentos. Y la severamente crítica en el Centro-Norte, con otros tantos departamentos.

El panorama próximo señala que los departamentos en situación severamente crítica soportarán un auge de necesidades muy notable a causa de por otro demográfico cifrado en 550.000 personas. El resto (1.582.000) representará el 72% del auge total y recaerá sobre todo el país, sujeto a urgencias para hacer frente no sólo al crecimiento sino a la difusión del mismo.

A modo de síntesis puede decirse que de los 330 municipios del país el 67% (220) presentan alto grado de pobreza, y de ellos un 40% se enmarcan en Huehuetenango, mientras la quinta parte en el Quiché. En menor proporción en Alta Verapaz, Sololá, San Marcos, Baja Verapaz y Totonicapán. Un tercio (78) gozan de segunda prioridad, con la quinta parte en San Marcos y el resto repartido entre Sololá, Chimaltenango, Chiquimula, Quiché, Quetzaltenango, Jutiapa y Alta Verapaz. Otro tercio (75) presenta tercera prioridad de atención, de los cuales casi la mitad se reparten por igual entre Quetzaltenango y Suchitepéquez, mientras la décima parte en Sacatepéquez (SEGEPLAN, 1996; 28-29). Sumando las tres prioridades un grupo de departamentos presentan pobreza en todos sus municipios (Sololá, Totonicapán, Quiché y Chimaltenango). Con más de tres cuartas partes Alta Verapaz, Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango. Entre la mitad y tres cuartas partes Baja Verapaz, Suchitepéquez, Sacatepéquez, Retalhuleu, Chiquimula y Jalapa (comentar donde están y ponerlos en relación con la cantidad de población).

5. BIBLIOGRAFÍA

- AVANCSO (1993): «Agricultura y campesinado en Guatemala: una aproximación». *Textos para Debate*, N° 1, Ciudad de Guatemala.
- BAUMEISTER, E. (1992): «Características y potencial de la agricultura en la estrategia alternativa de desarrollo», en STEIN, E. y ARIAS, S., *Democracia sin pobreza: alternativa de desarrollo para el istmo centroamericano*. DEI, San José de Costa Rica.
- CEBRIÁN ABELLÁN, A. (1996): «Informalidad y precarismo urbano en Ciudad de Guatemala y su área metropolitana». *IV Reunión de Geografía de Iberoamérica*, Cuenca (en prensa).
- CEBRIÁN ABELLÁN, A. (1996): «Factores del deterioro ambiental en Guatemala. Del proceso forzado a las situaciones críticas». *Congreso Iberoamericano*, Lleida, noviembre (en prensa).

- IDIES (1994): «Aspectos socioeconómicos y situación agraria». *Estudios Sociales*, IV Época, N° 52, pp. 11-30.
- INE (1993): *Cobertura de servicios por municipio (necesidades básicas insatisfechas)*. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
- INE-SEN (1995): *Estimaciones de población urbana y rural por Departamento y Municipio 1990-1995*. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
- INE-SEN (1996): *Características generales de población y habitación*. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
- LÓPEZ, J.R. (1986): «Los orígenes económicos de la crisis en Centroamérica». En URRUTIA, E. et al., *Centroamérica: política económica y crisis*, DEI-ICADIS-UNA, San José de Costa Rica.
- PÉREZ SAINZ, J.P. (1991): *Ciudad de Guatemala en la década de los ochenta: crisis y urbanización*. Debate, N° 10, FLACSO-FUNDACION FRIEDRICH EBERT, Ciudad de Guatemala.
- SEGEPLAN (1996): *Orientaciones para una estrategia nacional de ordenamiento territorial*. Servicio General de Planificación, Ciudad de Guatemala.
- SEGEPLAN (1996): *Programa de Gobierno 1996-2000*. Presidencia de la República, Ciudad de Guatemala, Guatemala.
- UNICEF-SEGEPLAN (1994): *Realidad socioeconómica de Guatemala*. Ed. Piedra Santa, Ciudad de Guatemala.





